



PROPOSICI6N ADITIVA AL PROYECTO DE LEY No. 102 de 2025 C6MARA, 083 DE 2025 SENADO" POR LA CUAL SE DECRETA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL Y LEY DE APROPIACIONES PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026"

Adici6nense al Presupuesto General de la Naci6n de la vigencia fiscal correspondiente, en la Secci6n 4001 - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la suma de un bill6n de pesos (\$1.000.000.000.000), con destino a la financiaci6n, ejecuci6n y fortalecimiento de proyectos de acceso, cobertura y calidad de agua potable en el territorio nacional.

Liliana Rodr6guez

Manoza A.
Jenny Barrera

Fernando J. R6n

Chyly

Jhon Fredi V.

Oba localidades.
C6mara X Bopki P. A. Verde

Guac Lina
Milene J. J. J. J.

Shirley L. J. J.

Gildardo Silva

Modesto J. J. J.

GILBERTO B. J.
A. C. C. C.

COMISI6N GENERAL
C6MARA DE REPRESENTANTES
Recibido por: DOMINGOS L. J.
Fecha: 02/09/2025
Hora: 12:18m

JUSTIFICACIÓN

La proposición que busca adicionar un billón de pesos al Presupuesto General de la Nación en la Sección 4001 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con destino a proyectos de agua potable y saneamiento básico, responde a la reducción significativa que ha experimentado la inversión del sector. Mientras en 2025 se contaba con una asignación de 4,38 billones de pesos, el proyecto de presupuesto para 2026 comunica apenas 2,56 billones, lo que refleja una caída de 1,82 billones. Esta disminución compromete directamente la continuidad de proyectos en curso, el inicio de nuevas intervenciones y el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

El Ministerio de Vivienda ha identificado la necesidad de ampliar los recursos en 2,3 billones de pesos, de los cuales 1,02 billón corresponde a agua y saneamiento y 1,28 billones a soluciones habitacionales. El faltante total se distribuye así: el Viceministerio de Agua pasó de un presupuesto de 1,676.468 millones en 2025 a una cuota de apenas 820.459 millones en 2026, cuando sus necesidades reales ascienden a 1,793.261 millones, lo que genera un déficit de 972.802 millones de pesos. Por su parte, el Viceministerio de Vivienda pasó de 2,829.933 millones en 2025 a 1,241.543 millones en 2026, frente a unas necesidades de 3,017.043 millones, lo que deja un faltante de 1,275.500 millones. En conjunto, la brecha para 2026 asciende a 2,248.302 millones de pesos.

En agua y saneamiento básico, los recursos faltantes comprometen proyectos de alto impacto. Con 472.765 millones se garantizaría la financiación de 65 proyectos estratégicos que beneficiarían a 5,6 millones de personas; con 172.236 millones se cubriría la continuidad de 61 proyectos actualmente en ejecución, que llegarían a 2,6 millones de beneficiarios; con 85.000 millones se financiarían 16.000 conexiones intradomiciliarias, cerrando brechas urbanas y rurales; con 105.000 millones se apalancaría la planta desalinizadora de la Alta Guajira y la rehabilitación de 10 sistemas de agua, que atenderán a 273.000 personas; con 51.801 millones se ejecutarían 8 proyectos de basura cero en municipios PDET y ZOMAC como Acandí, Itzmina, Norosí, Quibdó y Río Viejo; con 61.000 millones se implementarían esquemas diferenciales y comunitarios en municipios rurales de categorías 4, 5 y 6, garantizando acceso en zonas apartadas; y con 25.000 millones se fortalecerían 295 organizaciones comunitarias en Cauca, Córdoba, Nariño y Sucre. En total, los recursos permitirían beneficiar a 8,2 millones de personas, cifra que representa un salto sustancial hacia el cumplimiento de las metas del PND.

Las proyecciones confirman la urgencia. Para 2025, el acceso urbano proyectado alcanzará 39,590.735 personas, mientras que el acceso rural llegará a 8,499.322, lo que suma un total de 48,090.057 personas con acceso a agua potable. La variación frente al

año anterior sería de 574.143 nuevas personas, pero la meta es de 1.239.455, quedando un rezago de más de 665.000. Para 2026, se proyecta un acceso urbano de 37,957.105 y un acceso rural de 8,821.437, alcanzando un total de 48,778.542 personas, con 688.485 nuevos beneficiarios, frente a una meta de 826.303, con un déficit de más de 137.000.

En saneamiento, el panorama es similar. En 2025 se espera llegar a 47,790.674 personas con cobertura, con 533.962 nuevas incorporaciones, cuando la meta es de 1,055.866. En 2026, el total llegaría a 48,365.793 personas, con 575.119 nuevos beneficiarios, frente a una meta de 703.910, lo que muestra que sin la adición presupuestal el déficit continuará ampliándose y no se cumplirán los objetivos trazados.

Además de las cifras de agua y saneamiento, es importante recordar que la reducción de recursos afecta también al Fondo Nacional de Vivienda. Allí se estima un faltante de 1,275.500 millones, que se requieren para otorgar 23.133 subsidios de mejoramiento de vivienda, iniciar la ejecución del programa de autogestión contemplado en el Decreto 585 de 2025 con 3.000 soluciones habitacionales en 204 municipios de 29 departamentos, y financiar 1.737 viviendas nuevas rurales. El incumplimiento de estos compromisos pondría en riesgo acuerdos pactados con comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como metas asociadas a la reducción del déficit habitacional.

En este sentido, debe resaltarse de manera expresa que con estos recursos adicionales, se aportarán a las siguientes metas del PND: porcentaje de hogares con déficit habitacional, cuya meta del cuatrienio es 26 por ciento; hogares beneficiados con mejoramiento de vivienda urbanos y rurales, cuya meta del cuatrienio es 400.000; y hogares beneficiados con Subsidio Familiar de Vivienda de adquisición urbanos y rurales, con una meta de 93,8 por ciento.

El acceso al agua potable y al saneamiento básico es un derecho humano fundamental reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 64/292, y la falta de recursos suficientes para su financiación no solo pone en riesgo metas nacionales, sino que perpetúa brechas históricas en comunidades rurales, étnicas, y territorios PDET y ZOMAC. La inversión solicitada permitirá cumplir con compromisos internacionales, mejorar la salud pública, reducir enfermedades transmitidas por el agua, aumentar la productividad laboral y fortalecer la sostenibilidad ambiental.

Cada peso invertido en este sector genera retornos múltiples en términos sociales y económicos, razón por la cual la adición de un billón de pesos no es simplemente un gasto, sino una inversión estratégica que asegurará bienestar, equidad territorial y cumplimiento de metas de desarrollo sostenible en beneficio de millones de colombianos.

